



INICIO INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS

Sr. Juez del Trabajo de la V ° Nominación. -

JUICIO: "HEREDIA, JONATAN ARMANDO c/ CAHUANA MARIELA MYRIAM s/ COBRO DE PESOS"

EXPTE: 222/12 I-1

MARIA BELEN RAMAYO HERNANDEZ, MP
4693, con domicilio real en calle Lamadrid N°377 Piso 9 Oficina A de la ciudad de San Miguel de Tucumán, constituyendo domicilio digital en 27-25843052-8, correo electrónico belenramayo@hotmail.com teléfono 381-6433524, por derecho propio, a S.S. respetuosamente me presento y digo:

I) OBJETO:

Que vengo por este medio a iniciar ejecución de honorarios en contra de la Sra. Cahuana Mariela Myriam DNI: 25.255.221, domiciliado en Pje. Belisario López N°440, de esta ciudad, por el monto de pesos \$13.740 trece mil pesos setecientos cuarenta con sesenta y siete centavos con más sus acrecidas legales. Adjunto sentencia y cedula de notificación de la misma.

II) HECHOS

Que estando recaída la sentencia en autos, de fecha 07 DE SEPTIEMBRE de 2018 en donde se HACE LUGAR A LA DEMANDA PROMOVIDA y SE REGULAN HONORARIOS de TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$13.740.67), es que vengo en tiempo y forma a iniciar la ejecución de honorarios, monto que deberá ser soportado por la demandada.


MARIA BELEN RAMAYO HERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. 4693 Fº KL 184
C.U.I.T. 27-25843052-8



Que al día de hoy aún no fue cumplido ni siquiera parcialmente, y se proceda a la ejecución en los términos en el C.P.C.C.T. art. 555 y cc.

Dicha suma surge de las siguientes consideraciones:

1) 50% del valor de honorarios regulados por el principal en estas actuaciones (\$19629.53 x 50%), es decir, la suma de pesos **NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y SEIS (\$9814.76)** a cargo de la demandada.

2) 100% del valor de Honorarios por la reserva de fs. 183, es decir, **TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS (\$3925.91)**

Es por ello que solicito se libre mandamiento de intimación de pago y se otorgue plazo para oponer excepciones y en defecto de pago, se dicte sentencia condenatoria, por capital, intereses y costas.

III) PETITORIO

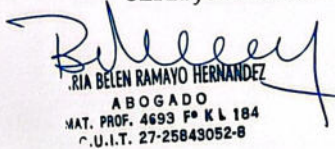
1. Se me tenga por presentado, en el carácter legal invocado, por parte, con domicilio legal constituido, se me de intervención de ley.

2. Se libre mandamiento de intimación de pago, en los términos de los art. 492 y 498 del C.PCC. El mandamiento deberá contener: El importe de los honorarios reclamados, los intereses a partir de la mora, los gastos y costas ocasionados por el mismo, la citación para oponer excepciones e indicación que se entregan las copias del 128 procesal

3. Que, en definitiva, se ordene llevar adelante la Ejecución de Honorarios por el importe regulado, con intereses desde la fecha de mora hasta su efectivo pago, más gastos y costas.

Proveer de Conformidad

SERA JUSTICIA.-


RIA BELEN RAMAYO HERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. 4693 F° K L 184
C.U.I.T. 27-25843052-8

HEREDIA JONATAN ARMANDO C/ CAHUANA MARIELA MYRIAM S/
COBRO DE PESOS S/ CUADERNO DE PRUEBAS INSTRUMENTAL
INFORMATIVA (ACTOR N° 4) 222/12-A2
JUZG. LE CON. Y TRAM.

DEL TRABAJO - San Miguel de Tucumán, 15 de Mayo de 2.015.-

Nº Sentencia	AÑO
180	2015

AUTOS Y VISTO:

Para resolver la oposición deducida por la parte demandada, y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 4, el letrado apoderado de la parte demandada, Dr. Sebastián Rodríguez Rueda, deduce oposición respecto del punto 3 de la prueba informativa ofrecida, conforme lo dispuesto por el art. 80 CPL, por ser notoriamente improcedente, inconducente y carente en absoluto de relación con los hechos debatidos en esta litis.-

Sostiene que la actora pretende desvirtuar notoriamente el objeto del presente medio probatorio, en franca violación de las normas adjetivas.

Suspendidos los términos procesales, corrido el traslado de ley a la parte actora, esta contesta a fs. 8 por intermedio de su letrada apoderada María Belén Aramayo solicitando el rechazo de la oposición.

Considera que la razón primordial por la que se solicitó oficio a la Clínica Mayo, es precisamente para acreditar que el distracto del trabajador se produjo por razones de su paternidad y no por ausencias injustificadas.

Afirma que la prueba solicitada se encuentra vinculada expresamente a la causa de despido invocada por su parte al iniciar la demanda.

Encontrándose la incidencia en condiciones de resolver, cabe destacar que de conformidad a las previsiones del art. 300 CPCyC., de aplicación supletoria en el fuero, en concordancia con el art. 80 del CPL, lo que se debe establecer a los fines de valorar la admisibilidad de la prueba, y por ende la procedencia o no de la oposición deducida, es si ésta recae sobre hechos contrarios y conducentes para la resolución de la causa y si el medio resulta idóneo, de acuerdo a las normas procesales que gobiernan a la prueba de que se trata, debiendo en caso de duda razonable estarse por su admisibilidad, reservando el análisis sobre su pertinencia su valoración en definitiva, al momento de la resolución de la causa.-

Sin perjuicio de la atendibilidad o no que resulte de la prueba lo que no resulta de competencia de la proveyente, sino que será materia de valoración por la Excma. Cámara al momento de la sentencia definitiva, debe tenerse presente que la prueba ha sido receptada por considerar que atento los términos en que se encuentra trabada la litis se encuentra controvertida entre otras cuestiones, la fecha de ingreso del Sr. Heredia, y en particular las causas del despido, la que según la parte actora oferente fue consecuencia de la notificación a la demandada del embarazo múltiple de su novia y posterior nacimiento prematuro de sus hijos gemelos con graves problemas de salud que derivaran en el fallecimiento de uno de ellos. Por lo que la informativa ofrecida está destinada a acreditar hechos controvertidos.

En tal sentido cabe destacar que teniendo en cuenta los hechos relatados en la demanda, y negados en la contestación no surge en forma manifiesta o notoria la impertinencia de la información requerida en el punto n° 3, a los fines del esclarecimiento de las cuestiones litigiosas. Por lo que teniendo en cuenta que en caso de duda debe estarse al principio de

amplitud probatoria, difiriéndose su valoración para la sentencia definitiva, a la luz de las instrumentales adjuntadas en la causa, corresponde rechazar la oposición deducida por considerar que la prueba ofrecida en el punto nº 3 podría resultar útil para la dilucidación de la verdad material, máxime cuando -como en este caso concreto- no existe violación a los preceptos normativos que rigen específicamente el medio de prueba ofrecido.

En tal sentido se ha dicho por la jurisprudencia de nuestros Tribunales Locales que: **"La cuestión central pasa por establecer si el Juez está obligado a determinar, al momento de su ofrecimiento, si una prueba es o no pertinente, o si tal análisis puede ser reservado para definitiva. ... En conclusión, en tanto la impertinencia de la prueba no aparezca manifiesta y notoria, no resulta adecuado al fin de lograr la verdad objetiva, que es finalidad del proceso civil moderno, el rechazar liminarmente medios probatorios que sin guardar en ese momento estricta y rígida relación con el punto en debate, pueden luego aportar valiosos elementos de juicio y resultar útiles para formar la convicción del juez al momento de sentenciar, oportunidad en que efectuará el integral y definitivo análisis de la pertinencia, considerando aquella que le parezca útil para la solución del litigio"** CCyCTuc., Sala IIa., sent. 470, 20-12-93, "Apud Angel vs. Bco. de la Pcia. de Tuc. S/Cumplimiento de Contrato", Sumario 00004007.

"...No es fácil lograr un punto medio de equilibrio entre lo formal y lo sustancial, entre la verdad procesal y la verdad jurídica objetiva; pero es precisamente la dificultad de conseguirlo lo que hace de acicate para, sin sustraer al proceso de los marcos formales constitucionalmente exigibles, emprender la búsqueda de la verdad real. Lo justo en concreto tiene que ser alcanzado sin rebalsar aquellos marcos, pero también sin caer en rigorismo formalista. Dentro, y no fuera ni al margen del proceso, la verdad material u objetiva ha de tener apoyo y base para la solución justa del caso de acuerdo a sus circunstancias. Y estas circunstancias, cuando dependen de los hechos y de la prueba, tienen que hacer su aporte, direccionado siempre hacia la verdad (Bidart Campos, Germán J.; 'Un tema constitucional-procesal siempre atractivo: El exceso ritual manifiesto' LA LEY 2003-F, 1494).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia: 300 del 11/04/2014, "C.E.S.A. (CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.) S/CONCURSO PREVENTIVO INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR EL BANCO COMAFI S.A."

COSTAS: : atento el resultado arribado, corresponde su imposición a la demandada vencida, por aplicación del principio contenido en el art.105, 1er. párrafo del CPCyC.-

Por ello,

RESUELVO:

I) **NO HACER LUGAR** a la oposición deducida por la demandada.

II) **COSTAS:** como se consideraran.

III) **HONORARIOS:** reservar pronunciamiento para su oportunidad.

IV) **REABRANSE** los términos que se encontraban suspendidos a partir de la notificación de la presente resolutive. En su mérito y proveyéndose lo pertinente al estado procesal del presente medio probatorio, cúmplase con los libramientos de los oficios conforme se ordena a

Fs. 3.

GUSTAVO AUGUSTO GRUCCI
SECRETARIO JUDICIAL CAT. B
JUZGADO DE CONCILIACION Y TRAMITE IV. NCM.

HÁGASE SABER.

Dña. SUSANA CATALINA FE
J U E Z
JUZGADO DE CONCILIACION Y TRAMITE DEL TRABAJO
VI. NCM

En 26/5/15 a las 4030 y 4029



Cédula n° 8483

**PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
CEDULA DE NOTIFICACION**

San Miguel de Tucumán, 12 de octubre de 2018.-

JUZGADO: JUZGADO DE CONCILIACION Y TRAMITE DEL TRABAJO - QUINTA
NOMINACION
Secretaria QUINTA NOMINACION

**AUTOS: HEREDIA JONATAN ARMANDO C/ CAHUANA MARIELA MYRIAM S/
COBRO DE PESOS-EXPTE N°222/12**

Se notifica a: **CAHUANA, MARIELA MYRIAM**
Domicilio: **PJE BELISARIO LOPEZ N° 440**

PROVEIDO

"San Miguel de Tucumán, 7 de septiembre de 2018.-AUTOS Y
VISTO:...**RESULTA:...****CONSIDERANDO: ...RESUELVO: I) ADMITIR PARCIALMENTE a**
la demanda promovida por el Sr. Jonatán Armando Heredia, argentino, mayor de edad, DNI
N° 42.445.432, domiciliado en Barrio La Estación, calle s/ nombre y s/ número, de la
localidad de San Andrés, Provincia de Tucumán, en contra de la Sra. Mariana Myriam
Cahuana, DNI N° 25.255.221, con domicilio real en calle 24 de Septiembre N° 233 de esta
ciudad. En consecuencia, se condena a esta última al pago de la suma total de **\$84.271,63.-**
en concepto de días trabajados del mes de julio de 2011, diferencias de vacaciones
proporcionales año 2011, diferencias de SAC 1° semestre año 2011, SAC proporcional 2°
semestre año 2011 (SAC s/ días trabajados) y diferencias salariales correspondientes al
período comprendido entre el mes de mayo de 2010 y el mes de junio de 2011, la que deberá
hacerse efectiva dentro de los diez días de ejecutoriada la presente. II) **Absolver** a la
accionada de los rubros reclamados por los conceptos de indemnización por antigüedad,
indemnización por preaviso, integración mes de despido, SAC sobre preaviso, diferencias
salariales correspondientes al período comprendido entre el mes de mayo de 2009 y el mes
de abril de 2010, multa del art. 1 de la ley 25.323, multa del art. 2 de la ley 25.323 y multa del
art. 132 bis de la LCT, conforme a lo considerado. III) **Costas:** en la proporción establecida,
de acuerdo a lo considerado. IV) **HONORARIOS 1)** A la letrada María Belén Ramayo
Hernández, por sus actuaciones profesionales en el carácter de apoderada de la parte
actora, en las tres etapas del proceso de conocimiento, la suma de \$19.629,53.-; por la
incidencia de fs.104/05, la suma de \$2.944,43.-; por la incidencia de fs.183 la suma de
\$3.925,91.- y por la incidencia de fs. 354/55 la suma de \$1.962,95.- V) **HONORARIOS:** Al
letrado Sebastián Rodríguez Rueda por sus actuaciones en el carácter de apoderado de la
parte demandada en las tres etapas del proceso de conocimiento, la suma de \$16.357,94.-
por la incidencia de fs.104/05, la suma de \$2.453,69.-; por la incidencia de fs.183 la suma de
\$1.635,79.- y por la incidencia de fs. 354/55 la suma de \$3.271,59.- VI) **HONORARIOS:** al
perito contador CPN Juan Francisco Núñez, al no haber realizado el trabajo pericial
encomendado no se le regularán honorarios en virtud de lo normado por el art. 51 último
párrafo del CPL. VII) **PLANILLA FISCAL:** Oportunamente practíquese y repóngase (art. 13
ley 6204). VIII) **COMUNIQUESE** a la Caja de Previsión y seguridad Social de Abogados y
Procuradores de Tucumán. IX) **COMUNICAR** a AFIP-DGI en la etapa de cumplimiento de
sentencia de conformidad a lo prescripto por el art. 17 de la ley N° 24.013. REGISTRESE,
ARCHIVESE Y HAGASE SABER.- LM 222/12 Fdo: DRA. SUSANA CATALINA FE - Juez"
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. Adjunta 2 bonos movilidad.- 222/12-SINC

Dr Martin Esteban Duarte
Secretario

125853
M.E. N° Recibido Hoy
Para su cumplimiento pase al Oficial Notificador. Sr:

10 OCT 2018

Secretario Jefe

San Miguel de Tucumán, **17 OCT 2018** de en la fecha siendo
horas **10:55** Notifiqué del contenido de esta cédula.



Proyecto de ley, DNT 28.255.221

SINC

D. FAVIO GERMAN CUELLO
PROSECRETARIO JUDICIAL G
OFICIAL NOTIFICADOR
CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EN **18 OCT 2018** A SU ORIGEN.

MARIA INES ROBLEDO DE YRIGO
PROSECRETARIA CAT. G
OFICIAL NOTIFICADOR
CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Expediente: **222/12**

Carátula: **HEREDIA JONATAN ARMANDO C/ CAHUANA MARIELA MYRIAM S/ COBRO DE PESOS S/**

Descripción: **DEFINITIVA**

Unidad Judicial: **JUZGADO DEL TRABAJO V**

JUICIO: HEREDIA JONATAN ARMANDO C/ CAHUANA MARIELA MYRIAM S/ COBRO DE PESOS – EXPTE 222/12

San Miguel de Tucumán, 7 de septiembre de 2018.-

AUTOS Y VISTO:

Que vienen los autos a despacho para el dictado de la sentencia definitiva, de cuyo estudio

RESULTA:

Que a fs. 31/ se apersona la letrada María Belén Ramayo Hernández, invocando la representación del Sr. Jonatan Armando Heredia, DNI N° 42.445.432, domiciliado en Barrio La Estación, calle s/ nombre y s/ número, de la localidad de San Andrés, Provincia de Tucumán, e inicia demanda por cobro de pesos en contra de la Sra. Mariana Myriam Cahuana, DNI N° 25.255.221, con domicilio real en calle 24 de Septiembre N° 233 de esta ciudad, por la suma de \$135.400,39.- o lo que en más o en menos resultare de las probanzas de autos, con más los intereses, costas y gastos, en concepto de indemnización por despido incausado, preaviso, integración mes de despido, días trabajados julio 2011, vacaciones proporcionales 2011, SAC proporcional 2º semestre, SAC s/ días trabajados, SAC s/ preaviso, diferencias salariales y multas establecidas en los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323 y art. 132 bis de la LCT.

Relata que su mandante ingresó a trabajar como vendedor en el local de venta de celulares ubicado en calle 24 de Septiembre N° 233 de esta ciudad que pertenece a la demandada en autos, en fecha 05/05/09, que durante todo el primer año trabajó como empleado no registrado (es decir, en negro), cumpliendo jornadas laborales en horario comercial de lunes a sábados de 08:30 a 13:00 y de 16:30 a 21:00 hs. con una remuneración diaria de \$50.- pesos (\$1.200 mensuales) cuando debía percibir la suma de \$3.489,05.-. Explica que su poderdante cumplía tareas de atención y asesoramiento al público en ventas de unidades de telefonía celular con una categoría profesional de Vendedor B, con carácter permanente y que nunca recibió capacitación y/o perfeccionamiento durante su vinculación laboral.

Afirma que durante el comienzo la relación laboral se desarrolló con normalidad cumpliendo su representado sus tareas en forma comprometida, con esmero y dedicación, sin ningún tipo de incumplimiento de las obligaciones que derivan de un contrato de trabajo, no habiendo recibido jamás ningún tipo de sanción, ni siquiera una crítica o una queja de ningún tipo.

Sostiene que recién el día 03/05/10 la patronal registró parcialmente la relación laboral que la unía con su representado, haciéndolo solo a partir de esa fecha (y no desde la verdadera fecha de ingreso) y solo por jornada parcial a pesar de que en los hechos cumplía jornada completa. Señala, además, que no se le abonaba el salario de acuerdo con las escalas salariales aplicables.

Manifiesta que con el correr del tiempo la empleadora adoptó una actitud persecutoria y discriminatoria con su mandante, en razón de los pedidos efectuados por éste a los fines de que le mejorase su situación laboral, viéndose agravada tal situación cuando el Sr. Heredia le comunicó a la patronal el futuro nacimiento de su hijo. Relata que tal fue la situación que en fecha 27/06/11 le impidió el ingreso a su lugar de trabajo sin darle ningún tipo de explicaciones, con una frialdad y desinterés absoluto para con su empleado quien había comunicado que su pareja se encontraba con graves complicaciones propias de un embarazo múltiple.

Explica que la empleadora le había manifestado al Sr. Heredia que “no debía preocuparse, que todo se solucionaría y que se reintegrara a su trabajo cuando su mujer se encuentre estable”. Indica que en fecha 30/06/11, luego de solo seis meses de gestación, nacieron los hijos de su mandante (uno de los cuales falleció el día 11/07/11, por lo que en fecha 04/07/11 el actor se presentó a su lugar y nuevamente le negaron el ingreso.

Sindica que ante la situación descripta, el accionante remitió su primer TCL intimando a la patronal para que en un plazo perentorio de 48 hs. le aclare su situación laboral, bajo apercibimiento en caso

de silencio o negativa de considerarse injuriado y darse por despedido por su exclusiva culpa y responsabilidad. En dicha misiva solicitó además que se proceda a registrarlo correctamente denunciando sus reales condiciones laborales y que se regularice su situación ante los organismos de la seguridad social bajo apercibimiento de lo prescripto en el art. 132 bis de la LCT, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes y de las sanciones de los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323, arts. 8 a 15 de la Ley 24.013 y arts. 14, 21, 63, 80, 132 bis y ccs de la LCT.

Señala que ante el silencio guardado por la patronal, en fecha 19/07/11 su mandante remite el segundo TCL dándose por despedido por exclusiva culpa y responsabilidad de la demandada a partir de ese día, e intimando el pago de su liquidación final, indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, diferencias salariales, SAC proporcional y vacaciones proporcionales en un plazo de 48 hs., bajo apercibimiento de lo normado por el art. 2 de la Ley 25.323, art. 80 y art. 132 bis de la LCT y de la Ley 24.013.

Indica que dicha misiva tampoco fue contestada por la Sra. Cahuana, por lo que el Sr. Heredia dio inicio a actuaciones ante la SET, explicando que en esta instancia administrativa solo se le abonó la suma de \$2.120.- a cuenta de lo adeudado, por lo que se vio obligado a recurrir a la instancia judicial para obtener el cobro de sus acreencias.

Ofrece prueba documental. Adjunta planilla de rubros y montos reclamados.

Que, corrido el traslado de la demanda a la accionada, a fs. 64/67 se apersona el letrado Sebastián Rodríguez Rueda en el carácter de apoderado de la Sra. Mariela Myriam Cahuana, conforme poder general para juicios glosado a fs. 63, y contesta demanda solicitando su rechazo con expresa imposición de costas al actor.

Luego de negar en general y en particular los hechos invocados por el accionante, da su versión de los hechos manifestando que el actor ingresó a trabajar para su mandante en la fecha consignada en los recibos de haberes, o sea el 03/05/10, laborando siempre a tiempo parcial y cumpliendo sus tareas en horario matutino.

Afirma que el actor nunca se caracterizó por su dedicación ni esmero en el cumplimiento de sus labores, por lo que el día 24/06/11, mediante comunicación interna, firmada de puño y letra por el trabajador, se le advirtió que se le descontaría el presentismo de sus haberes del mes de junio por sus reiteradas llegadas tarde y/o inasistencias. Explica que a pesar de esa advertencia, el Sr. Heredia en fecha 27 y 28 de ese mismo mes se presentó a trabajar no solo tarde sino en un evidente estado de ebriedad, por lo que el día 29/06/11 se le remitió carta documento al domicilio denunciado al inicio de la relación laboral, esto es, Ruta 65 Km. 19, Chicligasta, Concepción, Provincia de Tucumán, notificándole una suspensión de cinco días sin goce de haberes a contar a partir de la fecha de la misiva y hasta el día 06/07/11.

Indica que dicha epístola fue devuelta al remitente el 19/07/11, por no haber sido retirada del correo a pesar de los dos avisos de visita que se le dejara.

Relata que con fecha 04/07/11 el actor remitió TCL consignando un nuevo domicilio que no era el denunciado al inicio de la relación laboral, intimando se le aclare su situación laboral y se lo registre con sus verdaderas condiciones laborales y sin indicar que sus hijos habían nacido el 30/06/11. Señala que dicha misiva fue contestada por CD remitida al nuevo domicilio, esto es, Barrio La Estación, localidad de San Andrés, Provincia de Tucumán, rechazándose el TCL por improcedente, falaz y aventurero, negando su mandante que deba aclarar situación laboral, transcribiendo nuevamente la epístola del 30/06/11. Afirma que dicha misiva tampoco fue recibida en el domicilio declarado por el trabajador por ser desconocido.

Sindica que en fecha 12/07/11 su representada envía nuevo despacho telegráfico intimando al trabajador para que se reintegre a cumplir su débito laboral y justifique sus inasistencias en el plazo perentorio de 48 hs. bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo y en fecha 20/07/11 se remitió CD haciendo efectivo dicho apercibimiento disolviendo la relación laboral por su exclusiva culpa y responsabilidad en virtud de no haberse presentado a retomar sus tareas, poniendo a disposición del trabajador la liquidación final y la certificación de servicios y remuneraciones en plazo de ley. Explica que estas dos misivas también fueron devueltas por el correo por ser desconocido el domicilio del actor.

Manifiesta que en fecha 19/07/11 el Sr. Heredia envía un nuevo TCL dándose por despedido ante el supuesto silencio de su representada, sin comunicar ni el nacimiento de sus hijos ni el fallecimiento de uno de ellos. Expresa que ese TCL fue respondido por su mandante en fecha 27/07/11, ratificando anteriores CD, formulando reserva de consignar los montos de la liquidación final y la

documentación laboral ante la SET por no haber concurrido el trabajador a recibirlas, lo que se concreta en fecha 02/08/11 en el expte administrativo N° 7677/181/C/2011.

Por todo lo expuesto, solicita el rechazo de la demanda con expresa imposición de costas al actor.

Plantea plus petición inexcusable. Impugna la planilla de rubros reclamados, en particular, las sumas reclamadas en concepto de multas. Ofrece prueba documental.

Que, a fs. 83 se abre la causa a pruebas prueba al sólo fin de su ofrecimiento y por proveído de fecha 01/10/12 (fs. 88) se convoca a las partes a la audiencia del art. 69 del CPL.

Que a fs. 94 obra acta de audiencia de conciliación celebrada el día 14/11/12, por la cual se deja constancia de la comparencia del abogado apoderado de la parte accionada, no haciéndolo ni el actor ni su letrada apoderada. En su mérito, se hace efectivo el apercibimiento previsto en el art. 73 del CPL (ley 6.204 texto anterior) teniéndose al accionante por desistido de la demanda.

Que mediante presentación de fs. 97 la letrada Ramayo Hernández manifiesta que por razones no imputables a su parte no pudo concurrir a la audiencia de conciliación en razón de haber sido víctima de un atraco con motocicleta que le ocasionó golpes y lesiones en su pierna izquierda y una crisis nerviosa por la cual debió ser asistida, por lo que solicita se declare la nulidad del acta de audiencia labrada en esa fecha dejándola sin efecto y se fije nueva audiencia de conciliación.

Que habiéndose corrido traslado de dicha presentación a la parte demandada (fs. 98/99), el letrado Rodríguez Rueda contesta a fs. 101/02 oponiéndose al pedido de nulidad por las razones esgrimidas en su conteste.

Que por resolución interlocutoria de fecha 10/04/13 se rechaza la nulidad interpuesta y se deja sin efecto el apercibimiento dispuesto en acta del 14/11/12 fijándose nueva fecha de audiencia de conciliación para el día 27/05/13 (fs. 104/05).

Que mediante presentación de fs. 109 la parte accionada apela la resolutive referida, concediéndose dicho recurso por proveído de fs. 110, siendo debidamente sustanciado conforme surge de las constancias obrantes a fs. 113/14 y 120/23. Que habiéndose elevado los autos a la Excma Cámara del trabajo, por sentencia de fecha 30/06/14 la Sala V rechaza el recurso de apelación interpuesto confirmando la resolutive cuestionada y ordenando la remisión de estos actuados al juzgado de origen a los fines de continuar con el trámite de la causa en el estado en que se encontraba (fs.140/43).

Que por presentación de fs. 147/49 la parte accionada interpone recurso de casación el cual es declarado inadmisibile por resolutive del 10/10/14 dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo (fs. 156/57)

Que recibida que fuera la presente causa, por proveído del 10/11/14 se fija nueva fecha de audiencia del Art. 69 del CPL, la que es celebrada el día 27/02/15 conforme da cuenta el acta glosada a fs. 169. En dicho acto se hace constar que habiendo concurrido el actor, asistido por su letrada apoderada, como así también el letrado apoderado de la accionada, las partes manifiestan su imposibilidad de conciliar a la vez que, de común acuerdo, solicitan se suspendan los plazos procesales difiriéndose el comienzo de la producción de prueba para el día 05/03/15. En dicha fecha se proveen las pruebas oportunamente ofrecidas por la parte actora y demandada.

Que del informe del actuario que obra a fs. 464 se desprende la actividad probatoria en el presente juicio, destacando que la parte accionante ha ofrecido seis cuadernos de pruebas: N° 1.- Constancias de autos (producida a fs. 02/27, 41 y 172/73); N° 2.- Instrumental-Informativa al Correo Oficial (no producida), a la SET (producida a fs. 203/06) , a la Clínica Mayo (producida a fs. 230/42), a ANSES (producida a fs.207/08), al Banco de Santiago del Estero SA (no producida), a la AFIP (producida a fs. 210/15 y 219/24), al Sindicato de SEOC (producida a fs. 245/310), a la Obra Social OSECAC (producida a fs. 225/226) y al Banco CITI (producida a fs. 217); N° 3.- Pericial Contable (no producida - fs. 312/41); N° 4.- Testimonial (no producida - fs. 342/57); N° 5.- Absolución de posiciones (producida a fs. 363/64) y N° 6.- Exhibición de documentación (no producida/ apercibimiento - fs. 372). Por su parte, la demandada ofreció cuatro cuadernos de pruebas: N° 1.- Documental (producida a fs. 44/62, 68 y 373/74); N° 2.- Informativa a la AFIP (no producida), a la SET (producida a fs. 395/96), al Correo Central (producida a fs. 399/404) y al Juzgado Electoral (producida a fs. 388); N° 3.- Confesional (producida a fs. 427/28) y N° 4.- Reconocimiento – Pericial Caligráfica (parcialmente producida a fs. 449).

Que a fs. 467/70 y 472/75 obran agregados los alegatos presentados por ambas partes.

Que, por proveído de fecha 30/11/17 (fs. 475) se llaman autos para sentencia, ordenándose que de forma previa los letrados intervinientes acompañen constancia de su situación ante la AFIP, el que fuera notificado a las partes mediante cédulas N° 10.091 y 10.092; y cumplido por ambos profesionales actuantes en la presente causa a fs. 476 y 485 respectivamente, quedando los autos en condiciones de resolver. Y,

CONSIDERANDO:

I.- Que se demanda el pago de la suma total de \$135.400,39.- (pesos ciento treinta y cinco mil cuatrocientos con treinta y nueve centavos) en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC proporcional, vacaciones proporcionales, integración mes de despido, diferencias de haberes y multas establecidas en los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323 y art. 132 bis de la LCT, siendo reclamados estos conceptos como consecuencia del despido indirecto en que se colocara el trabajador ante el silencio de la patronal a sus solicitudes.

II.- Que conforme surge de los términos de la demanda y su responde constituyen hechos admitidos por ambas partes y, por ende, exentos de prueba, la existencia de relación de dependencia laboral por tiempo indeterminado entre las partes; categoría que revestía y tareas cumplidas por el actor, el lugar de prestación de servicios y que el CCT nro 130/75 resulta aplicable al particular.

Por otro lado, debe tenerse por auténtica la documentación acompañada por la parte actora en virtud de que la accionada omitió expedirse sobre su validez o su autenticidad en la oportunidad prevista en el art. 88 CPL. Del mismo modo es oportuno pronunciarme sobre la documentación acompañada por la demandada, la cual fue expresamente reconocida por el trabajador en la audiencia de reconocimiento obrante a fs. 449 en el marco del CPD N°4, con excepción de las cartas documentos (a cuyo respecto me expediré sobre su autenticidad al tratar la cuestión referida al distracto por merecer consideraciones especiales) en razón de haber manifestado el accionante que no las recepcionó.

II.- Que en mérito a lo expuesto precedentemente, corresponde determinar como puntos contradictorios a tratar a aquellos hechos que requieren un previo análisis de la plataforma fáctica y probatoria de autos a los fines de la dilucidación de la verdad material del caso conforme al principio de la sana crítica racional. Asimismo, es pertinente encuadrar los supuestos probados, dentro de las normas aplicables al caso concreto. En tal sentido, las cuestiones controvertidas son: a) fecha de ingreso, horarios cumplidos por el trabajador y remuneración que debía percibir; b) fecha y justificación de la causal del despido; c) pluspetición inexcusable; d) procedencia de los rubros e importes reclamados; e) intereses, honorarios y costas.

PRIMERA CUESTION: fecha de ingreso, horario cumplido por el trabajador y remuneración que debía percibir

I. Controvierten los litigantes respecto a la real fecha de ingreso del Sr. Heredia como así también sobre la extensión de sus jornadas de trabajo y, por ende, respecto a la remuneración que le correspondía percibir.

Así, la letrada apoderada de la parte actora sostuvo que el Sr. Heredia ingresó a trabajar como empleado en relación de dependencia de la demandada el día 05/05/09, que durante todo el primer año trabajó como empleado no registrado (es decir, en negro), cumpliendo jornadas laborales en horario comercial de lunes a sábados de 08:30 a 13:00 y de 16:30 a 21:00 hs. y que recién el día 03/05/10 la patronal registró parcialmente la relación laboral que la unía con su representado, haciéndolo solo a partir de esa fecha (y no desde la verdadera fecha de ingreso) y solo por jornada parcial a pesar de que en los hechos cumplía jornada completa. Señala, además, que no se le abonaba el salario de acuerdo con las escalas salariales aplicables al particular y de conformidad a la jornada efectivamente cumplida.

Dichas circunstancias fueron rechazadas por el letrado apoderado de la accionada en su responde, manifestando que el actor ingresó a trabajar para su mandante en la fecha consignada en los recibos de haberes, o sea, el 03/05/10, laborando siempre a tiempo parcial y cumpliendo sus tareas en horario matutino.

II. Examinadas las pruebas pertinentes y atendibles para resolver esta cuestión, las mismas son valoradas en el siguiente sentido:

1.- Como prueba documental la parte actora adjuntó a fs. 02/10 los recibos de haberes (los que no fueron expresamente desconocidos por la accionada e incluso alguno de ellos fueron también acompañados por ella como prueba documental) de los que se extrae la conclusión de que el actor se encontraba registrado como Vendedor Cat. B jornada parcial con dos fechas de ingreso diferentes, ya que en algunos se consigna como tal el día 03/05/10 y en otros el día 05/05/10.

Sin embargo, tales instrumentos no tienen la virtualidad suficiente para acreditar por sí la media jornada alegada por la accionada, como así tampoco la fecha de ingreso discutida sobre todo teniendo en consideración que los datos allí consignados fueron fruto de la actividad unilateral de la demandada, en los que ninguna participación o injerencia tuvo la actora, por lo que las cuestiones cuya resolución me ocupa deberán ser analizadas en concordancia con las demás pruebas producidas en autos.

2.- Como prueba documental la parte demandada adjuntó a fs. 45/46 las constancias de alta y de baja ante AFIP en las que se consigna que la modalidad de contratación era a tiempo parcial indeterminado/permanente, registrándose como fecha de ingreso el día 03/05/10 y como fecha de egreso el día 30/06/11. A esta documentación le caben las mismas consideraciones efectuadas en relación a los recibos de haberes, por lo que en aras de la brevedad me remito a lo ya expresado en el punto precedente.

3.- De la prueba informativa dirigida a la AFIP (fs. 211/215) resulta acreditado que en los meses de mayo, junio y julio del año 2009 se le realizaron aportes al Sr. Heredia por parte de la firma Monte Pilone SRL. Asimismo consta que entre los meses de mayo de 2010 a junio de 2011 el actor registra aportes efectuados por la accionada en autos.

4.- De la prueba informativa dirigida a la obra social OSECAC (fs. 255/26) surge acreditado que el accionante fue afiliado a la misma desde el 06/10/10 hasta el 02/03/12, y que la Sra. Cahuana efectuó aportes a nombre del Sr. Heredia en los períodos comprendidos entre mayo/2010 y junio/11.

5.- De la prueba de absolución de posiciones ofrecida y producida por la parte actora (fs. 363/64), surge que al contestar la posición N° 6 (Para que jure el absolvente como es cierto que el Sr. Heredia trabajó cumpliendo horario de trabajo matutino y vespertino hasta el año 2011) la accionada contestó "No. Él trabajaba medio turno y no tengo clara la fecha por eso no puedo aclarar"; mientras que al efectuársele la posición N° 5 (para que jure la absolvente como es cierto que el actor trabajó para su empresa desde mayo de 2009 hasta julio de 2011), la absolvente respondió "Desconozco. No recuerdo la fecha".

6.- De la prueba de exhibición de documentación, ofrecida y producida por la actora en el cuaderno de pruebas nro 6 (fs. 366 y 372), se desprende que la parte demandada -debidamente notificada- no cumplió con la exhibición de la documentación laboral requerida por lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en el art. 61 CPL, respecto de la documentación solicitada, en especial respecto de los libros y registros laborales exigidos por el art. 52 y 54 de la LCT en el período 2009/2011, y tenerse por ciertas las afirmaciones del actor sobre las circunstancias que debieran constar, especialmente, respecto de las jornadas de trabajo, pues no se encuentran desvirtuadas en autos por otras pruebas.

7.- Por carecer de incidencia en las cuestiones a resolver, el restante material probatorio incorporado a la causa, aunque analizado y merituado por la suscripta, no amerita su mención puntual.

III.- En virtud del análisis del marco probatorio efectuado y a los fines de dirimir la cuestión en examen -jornada laboral cumplida-, cabe señalar que el art. 1 de la ley 11.544 sobre Jornada de Trabajo (aplicable subsidiariamente al particular por no encontrarse prevista la jornada legal en el CCT que rige la actividad) dispone que "la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas"; mientras que el art. 198 de la LCT dispone respecto de la jornada reducida que "la reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las características de la actividad".

De las normas transcritas se colige que la jornada normal de trabajo es la regla y la reducida la excepción; reducción que sólo puede ser establecida por las disposiciones legales que reglamenten

la materia, por estipulación particular del contrato de trabajo o de los convenios colectivos de trabajo. Tal estipulación particular debe ser acreditada por el empleador en forma fehaciente, dado que constituye una excepción al régimen general establecido por el art. 197 de la LCT.

Si la demandada invocó, tal como acontece en el caso de autos, la existencia de una jornada a tiempo parcial como sustento de su defensa, a ella correspondía, además, probar que las partes pactaron la reducción de la jornada máxima legal. Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia ha dicho que “la carga de la prueba de la existencia de una jornada de trabajo reducida corresponde al empleador que la invoca” (Cf., CSJT, sentencia Nº 760 de fecha 07-9-2012). Asimismo, sentó doctrina legal al disponer que “Es arbitraria y, por ende, debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que no tiene en cuenta que la carga de la prueba de la existencia de una jornada de trabajo reducida corresponde al empleador que la invoca (...)” (CSJT Sala Laboral y Contencioso Adm., Sentencia: 401, fecha: 12/05/2014 in re “De Lisio Mario Maximiliano vs. Distribuidora Maldonado SRL y otro s/ despido). Es decir, la modalidad de contratación a tiempo parcial o de “media jornada” hace gravitar sobre el empleador que la invoca una mayor exigencia para su prueba por contar con los elementos fehacientes que dan respaldo a su tesis.

Sin embargo del análisis de las constancias y pruebas producidas en autos se desprende que el empleador no ha demostrado la existencia de una jornada de trabajo reducida (o media jornada), como lo invocara en el responde, por lo que corresponde el rechazo de dicha alegación. En su mérito, se debe concluir que el actor cumplía una jornada normal y habitual de trabajo de 8 horas diarias, de lunes a sábados, o sea, un total de 48 horas semanales. Así lo declaro.

IV.- Ahora bien, respecto de la mayor antigüedad alegada por el accionante, considero que deberá tomarse como real fecha de ingreso la consignada en los recibos de haberes (03/05/10), ello por cuanto el actor no logró acreditar eficientemente que la relación laboral que lo unía con la demandada haya tenido una fecha de inicio anterior a la registrada.

Arribo a tal conclusión puesto que de las pruebas producidas en la causa no surge, en absoluto, que la fecha de ingreso del trabajador hubiera sido anterior a la consignada en los recibos de haberes acompañados, hecho que incluso resulta contradicho por el informe emitido por AFIP a fs. 211, de donde resulta que en los meses de mayo, junio y julio del año 2009 el actor tuvo aportes efectuados por la firma Monte Pilone SRL por lo que, habiendo cumplido una jornada completa para la accionada en autos -como lo manifiesta en su escrito inicial y fue declarado en el punto que antecede- resultaba sumamente dificultoso que el accionante prestara servicios simultáneamente también para la otra firma mencionada, sustentando la conclusión a que arriba la suscripta de que la fecha de registración es la que se corresponde con la realidad fáctica de autos.

En consecuencia, atento a la evidente orfandad probatoria de parte del actor y lo considerado precedentemente, debe concluirse que el Sr. Heredia se encontraba registrado correctamente desde la fecha que consigna la documentación laboral existente en la causa. Así lo declaro.

V.- Finalmente, respecto a la remuneración que le correspondía percibir al actor, habiéndose determinado que nos encontramos en presencia de un contrato de trabajo de tiempo completo y no frente a uno de tiempo parcial, ello trae necesariamente aparejado el derecho en cabeza del accionante de percibir el total de la remuneración prevista en la escala salarial aplicable para la categoría profesional de Vendedor B del CCT 130/75 que aquél revestía según recibos de haberes adjuntados a la causa y que no es materia de controversia. En su mérito, corresponde que se liquiden a favor del actor las diferencias salariales reclamadas en la presente causa. Así lo declaro.

SEGUNDA CUESTION: fecha, causal y justificación del despido

I. Controvierten los litigantes respecto a la fecha, causal y justificación del despido que diera por terminada la relación laboral.

Así mientras el actor sostiene que el despido se configuró el día 19/07/11 en forma indirecta, por exclusiva responsabilidad de la patronal debido al silencio en que incurriera ante su intimación a aclarar su situación laboral, proveerle tareas y registrarlo correctamente de acuerdo a su real fecha de ingreso; la accionada sostiene que el despido se produjo de forma directa y con justa causa en fecha 20/07/11 en razón del abandono de trabajo en que incurriera el Sr. Heredia.

II.- Para resolver la presente cuestión, en primer lugar, cabe aclarar que el contrato de trabajo no puede extinguirse dos veces, ya que se trata de una declaración de voluntad unilateral, de carácter recepticio y la suerte del contrato dependerá de la legitimidad en la comunicación del primer distracto. De modo tal que si el despido indirecto con invocación de causa alegado por el actor fue comunicado primero y legalmente, producirá sus efectos rescisorios desplazando así al despido

directo configurado por la empleadora y, sólo si la comunicación de aquél fuera inválida, habilitará el tratamiento del siguiente, lo que no obsta a la justificación o no de la causal en que se fundó el despido o a la procedencia de las indemnizaciones derivadas de la rescisión contractual.

III.- Analizada la prueba atendible y pertinente para resolver la presente cuestión, se advierte que:

1- De la prueba documental ofrecida y producida en autos por las partes, en especial del intercambio epistolar adjuntado, se advierte que en fecha 29/06/11 la patronal remitió CD nro 167752075 al domicilio denunciado por el trabajador (sito en Ruta 65 Km 19 Concepción, Chicligasta) a fin de comunicarle la suspensión sin goce de sueldo por cinco días (hasta el 06/07/11) dispuesta en razón de haber llegado tarde los días 27/06/11 y 28/06/11 y en estado de ebriedad (a pesar de haber sido ya advertido y apercibido en reiteradas ocasiones por idéntica causa). Dicha misiva fue devuelta a la patronal por el Correo Oficial en fecha 19/07/11 en razón de no haber sido reclamada por el destinatario a pesar de los dos avisos de visita dejados ante domicilio cerrado/ausente.

En fecha 04/07/11 el accionante remite TCL N° 167774331 intimando a su empleadora a fin de que le aclare su situación laboral bajo apercibimiento de considerarse gravemente injuriado y darse por despedido por su exclusiva culpa dado que desde fecha 27/06/11 no se le asignan tareas. Asimismo intima para que se lo registre de acuerdo a sus reales condiciones laborales regularizando su situación ante los organismos de la seguridad social. Cabe tener presente que en dicha misiva el trabajador consignó un domicilio real diferente, a saber, el de Barrio La Estación, San Andrés, Provincia de Tucumán.

Por CD nro 167777085 remitida el día 06/07/11 la empleadora contesta la intimación efectuada por el trabajador rechazando el TCL de fecha 04/07/11 por improcedente, falaz y aventurero, negando que no se le asignaran tareas desde la fecha consignada en el telegrama obrero y manifestando que ese mismo día (27/06/11) y al día siguiente llegó tarde a cumplir sus tareas habituales y en estado de ebriedad por lo que fue suspendido por cinco días mediante CD remitida en fecha 29/06/11 a su domicilio denunciado, la cual es transcripta en su totalidad y ratificada, por lo que, encontrándose pendiente de cumplimiento la sanción impuesta, niega que tenga obligación de aclarar ninguna situación laboral. Asimismo niega y rechaza las manifestaciones efectuadas respecto a la incorrecta registración invocada por el trabajador. Esta epístola fue remitida al nuevo domicilio consignado por el Sr. Heredia en su TCL, no siendo notificada por dirección insuficiente, conforme lo informara el correo, y siendo devuelta al remitente.

El día 12/07/11 la accionada nuevamente remite CD N° 140684460 dirigida al domicilio de B° La Estación, intimando al actor a que retome sus tareas habituales y justifique sus inasistencias en un plazo de 48 hs, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de servicios. Dicha misiva también fue devuelta al remitente por el Correo Oficial con la leyenda domicilio desconocido.

En fecha 19/07/11 el trabajador remite TCL nro 202922467 por el cual da por finalizada la relación laboral por considerarse gravemente injuriado ante el silencio de la patronal y ante su constante negativa a permitirle el ingreso a su lugar de trabajo y a registrarlo conforme su real fecha de ingreso, dándose por despedido por exclusiva culpa y responsabilidad de la demandada a partir de esa fecha. Asimismo intima a la Sra. Cahuana para que le abone su liquidación final, indemnización por despido incausado, preaviso, integración mes de despido, diferencias salariales, SAC proporcional, vacaciones proporcionales y por todo otro rubro adeudado bajo apercibimiento de lo normado por el art. 2 de la Ley 25.323, art. 80 y 132 bis de la LCT y Ley 24.013.

Por CD N° 202914275 del 20/07/11, no habiéndose reintegrado el empleado, la patronal hace efectivo el apercibimiento contenido en su CD del 12/07/11 resolviendo el contrato de trabajo por exclusiva culpa y responsabilidad del trabajador, poniendo a su disposición liquidación final y certificación de servicios y remuneraciones en los términos de ley. Una vez más la epístola fue enviada al domicilio del Barrio La Estación y entregada al remitente con la leyenda "desconocido".

Finalmente, el día 28/07/11 la demandada en autos contesta el TCL del 19/07/11 mediante epístola N° 167729417 rechazando el despido en que se colocara el trabajador, negando haber guardado silencio o negativa de proveerle tareas, ratificando anteriores comunicaciones y manifestando que atento que no se presentó a percibir los montos correspondientes a la liquidación final juntamente con la entrega de la documentación laboral, procederá a consignarlos ante el órgano administrativo del trabajo.

2- En lo que atañe a la autenticidad de los TCL remitidos por la parte actora cabe tener presente que no surge de las constancias de autos ni su autenticidad ni la fecha en que fueron impuestas o recepcionadas atento que el accionante ha ofrecido pero no ha producido la prueba informativa a tales efectos (constancias del CPA N° 2). Sin perjuicio de ello, corresponde tenerlas por auténticas

en virtud de no haber sido negadas en la oportunidad prevista por el art. 88, ap. a, del CPL por la accionada, no pudiendo soslayarse que, incluso, del tenor de su responde surge expresamente reconocida su recepción. En su mérito, se deberá tener como idénticas a las fechas de imposición y recepción de los TCL, como una excepción al principio recepticio al carecer dichos instrumentos de informe de entrega y no estar negada su recepción.

Ahora bien, respecto a la autenticidad de las cartas documentos remitidas por la accionada cabe tener presente que la misma resulta acreditada con el informe adjuntado por el correo oficial a fs. 404. Sin embargo, de dicho informe no resulta acreditada ni las razones por las cuales dichas misivas fueron devueltas, ni constan los motivos invocados, o las fechas de visita realizadas, como así tampoco la fecha en que fueron devueltas al remitente, por lo que, atento la orfandad probatoria existente y la negativa expresa del trabajador respecto a su recepción, deberá estarse a las fechas de imposición informadas y a las que constan en las diversas epístolas consignadas por los empleados del correo como los días en que concurrieron al domicilio del trabajador. Así lo declaro.

IV.- Del análisis efectuado precedentemente, y teniendo en consideración el carácter recepticio de las comunicaciones, en especial de la comunicación del distracto, considero que en el caso en análisis la desvinculación se configuró en fecha 19/07/11 por despido indirecto en que se colocara el trabajador ante el silencio de la patronal y debido a la constante negativa a reconocer y registrar correctamente la relación laboral desde su real fecha de ingreso, según lo manifestara en TCL de fs. 11. Ello por cuanto el trabajador ha comunicado fehacientemente su despido indirecto (19/07/11) de manera previa al despido directo con causa efectuado por la empleadora en fecha 20/07/11, lo que se encuentra plenamente reconocido por la accionada.- Así lo declaro.

V.- Habiéndose determinado en el punto precedente el momento en que se produjo el distracto, corresponde ahora determinar si las causas invocadas por el actor tienen la entidad y gravedad suficiente, en los términos del art. 57 en concordancia con el art. 242 de la LCT, para tener por justificado el despido indirecto en que se colocara.

Analizadas las pruebas pertinentes y atendibles para resolver la cuestión y teniendo en consideración que en su telegrama de despido el trabajador invoca dos causales de distracto (silencio y negativa constante a registrarlo conforme a su real fecha de ingreso), resulta menester determinar si alguna de ellas se ha configurado en el caso en estudio a los efectos de tener por justificado dicho despido.

Abocándome a su tratamiento, en primer lugar, considero necesario efectuar determinadas consideraciones respecto al domicilio del trabajador adonde fueran dirigidas las diferentes epístolas enviadas por la demandada. De las constancias de autos resulta que la accionada envió una primera carta documento al domicilio denunciado por el trabajador al comienzo de la relación laboral, conforme lo manifiesta en su responde y lo corroborara el actor en acta labrada de audiencia de absolución de posiciones glosada a fs. 428. En dicho acto, el accionante señaló, al responder a la posición nro 1, que tenía ese domicilio (ruta 65 Km 19, Chicligasta, Concepción) cuando ingresó, pero después de un año hizo el cambio de domicilio a Barrio La Estación, San Andrés, que eso consta en el DNI y que su empleadora lo sabía porque le otorgó permiso para hacer los trámites en la Banda del Río Salí.

De las pruebas obrantes en la causa, no surge ninguna que desvirtúe lo manifestado por el trabajador respecto a su oportuna comunicación de cambio de domicilio efectuada a su empleadora, sobre todo teniendo en consideración que la accionada no acompañó el legajo personal de su empleado ni al momento de contestar demanda ni al requerírsele en el CPA N° 6 conforme surge del proveído de fs. 372.

De lo expuesto, cabe inferir como primera conclusión que la misiva enviada por el empleador a los efectos de comunicar la sanción de suspensión por reiteradas llegadas tardes, no surtió los efectos que debía en razón de que fue remitida a un domicilio que no era el actual del trabajador.

Sin perjuicio de ello, no puede perderse de vista que la suerte corrida por dicha la carta documento remitida al primer domicilio denunciado fue diferente a las de las restantes epístolas, por cuanto esta primera misiva fue devuelta al remitente en razón de no haber sido reclamada por el destinatario en el plazo de ley luego de dos visitas realizadas por el correo en las que se informara “domicilio cerrado”. A diferencia de lo narrado respecto a la carta documento del 29/06/11, todas las demás misivas fueron remitidas al nuevo domicilio del trabajador (denunciado en sus telegramas), sito en Barrio La Estación, San Andrés, siendo devueltas al remitente por "dirección inexistente" (CD del 06/07/11) y por "desconocido" (CD de fecha 12/07/11, 20/07/11 y 28/07/11).

Abocándome a la consideración de las CD remitidas en fecha 06/07/11, 12/07/11, 20/07/11 y 28/07/11, cabe recordar que en materia de comunicaciones referidas a la relación laboral, el principio general es que quien elige un medio para cursar la notificación o comunicación carga con los riesgos que ello implica, siempre que no sea imputable al destinatario la causa que impida la efectividad del medio empleado (cfr. Fernández Madrid, J. C.-Caubet, A.-Fernández Madrid, D., Despidos y suspensiones. Más de 1000 casos prácticos, Ed. La Ley, 2009, T. I, p. 5). De allí que, a fin de realizar eficazmente las comunicaciones necesarias, se impone el principio de buena fe que exige a las partes ajustar su conducta a lo que es propio de “un buen empleador” y “de un buen trabajador”, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo” (art. 63, LCT). Asimismo, se ha dicho que quien proporciona un domicilio a todos los efectos del contrato de trabajo, asume la carga de que toda comunicación dirigida a ese domicilio va a ser normalmente recibida (cfr. Guerrero, A., Comunicaciones telegráficas en el contrato de trabajo, DT 2007, p. 269). Es decir, que el destinatario de la comunicación tiene también una carga de diligencia en concordancia con el mencionado principio de buena fe que rige toda relación laboral.

En el caso en estudio, el trabajador intimó a su empleadora para que aclarara su situación laboral (atento a la negativa de tareas invocada al no permitirle el ingreso a su lugar de trabajo desde el 27/06/11) mediante telegrama despachado el 04/07/11 y por medio de telegrama enviado el 19/07/11 se consideró despedido invocando silencio de la patronal frente a sus interpelaciones.

Por su parte, quedó constatado que la empleadora efectivamente contestó el primer telegrama enviado por el Sr. Heredia, mediante carta documento impuesta el día 06/07/11, esto es, dentro del plazo de 48 horas de recibida la intimación de la actora, y que en dicha misiva consignó como domicilio del destinatario el mismo que fuera indicado por éste en su primer telegrama de fecha 04/07/11, a saber, “Barrio La Estación, San Andrés”.

Habiéndose demostrado en la causa que dicho domicilio fue reconocido como propio por el mismo actor, lo que resulta no solo del intercambio epistolar sino de la restante documentación (en especial, de las actas de registro civil de fs. 14/16, de la cédula de notificación de audiencia de la SET de fs. 20, del formulario PS 2.55 de ANSES de asignación familiar por prenatal de fs. 25), de la prueba confesional ofrecida y producida por la demandada en el CPD N° 3 (acta de fs. 428) y del informe emitido por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal (fs. 388 vta.) producido por la accionada en el CPD N° 2.

A partir de lo señalado, considero que ha quedado demostrado que en los despachos de la empleadora el domicilio consignado fue el correcto y que el medio escogido para contestar la intimación que se le cursó fue el adecuado, por lo que la falta de entrega de las misivas al actor, no le es imputable a la demandada.

Sobre la presente cuestión se ha dicho que:

“Es del caso señalar que el principio de la buena fe tiene un rol primordial en materia de comunicaciones telegráficas, conforme lo remarca la pauta de interpretación que establece el art. 63 de la LCT. Esta norma exige que ambas partes adecuen sus conductas a los tipos sociales medios que denomina “buen empleador” y “buen trabajador”, que no deben ser entendidos como formulaciones absolutas, sino, por el contrario, generales, abstractas y flexibles, de modo de poder atender las particulares circunstancias que revisten los casos concretos. De este modo, la diligencia exigible al momento de la extinción del contrato de trabajo debe ser medida teniendo en cuenta el caso concreto, es decir, todas las particularidades de hecho que conforman la situación que se analiza. Centrándonos en el deber de buena fe que le asiste al receptor de una comunicación, es preciso señalar que su observancia implica facilitar el perfeccionamiento de la comunicación, por lo que -a contrario sensu- podría haber mala fe del destinatario cuando éste trate de frustrar todo intento de comunicación. Según se ha considerado (op cit. pág. 398), “la mala fe podría darse en dos estadios distintos: el primero, al no actualizar el domicilio con el fin de sustraerse a toda posibilidad de recibir comunicaciones; el segundo, cuando la comunicación fue dirigida a un domicilio correcto

pero no puede perfeccionarse porque el destinatario lo impide”. La culpa del receptor consiste básicamente en la ‘negligencia’ o ‘desinterés’ en facilitar un intercambio fluido de correspondencia, lo que se materializaría, según la definición del artículo 512 del Código Civil, en ‘la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar’. Así, en la casuística de la jurisprudencia se ha establecido que la ineficacia de la comunicación es imputable a la culpa del receptor cuando la recepción ha tenido lugar en condiciones tales que el destinatario debiese, usando una diligencia normal, tener conocimiento de la comunicación que le ha sido dirigida (CNAT, Sala II, sent. del 31/10/79 “Battilana Bolini, R. C/ Clarín Arte Grafico Editorial Argentino S.A.”, cit. en op. cit. pág. 395); o también cuando no llega a destino por circunstancias imputables a su inactividad (CNAT, Sala II, sent. del 08/04/85, in re “Barrios, María A. c/ San Sebastián S.A.”, cit. en op. cit. pág. 395). De lo hasta aquí expuesto, se concluye que si bien en principio el remitente de una carta documento o telegrama debe cargar con las consecuencias de que la comunicación no haya llegado a destino, ello no es así en aquellos casos en los que la falta de recepción de la carta postal resulta imputable a la culpa o mala fe del destinatario de la misma. En estos últimos supuestos la comunicación debe ser tenida por eficaz y es el destinatario de las comunicaciones quien debe cargar con las consecuencias negativas de su accionar. (...) se remarca que la mera circunstancia de que las piezas postales hayan sido devueltas con la observación “desconocido”, no constituye motivo suficiente para tener por no cumplida la notificación si de las constancias de la causa surge que dicha comunicación fue cursada al domicilio correcto”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo in re AMAYA JUAN PABLO Vs. GUTIERREZ Y OTRA S/ COBRO DE PESOS Sentencia N° 342 de fecha 14/05/2012

En base a todo lo expuesto, si el oficial de correo ha informado como “desconocido” al domicilio consignado o como desconocido a la persona a la que va dirigida la comunicación, tal como ocurre en el particular, y el destinatario no se apersonó siquiera a la oficina del correo a fin de averiguar sobre la posible existencia de una carta documento a su nombre, ello pone en evidencia una actitud impropia de las buenas relaciones laborales (art. 63, LCT), sobre todo teniendo en consideración que el trabajador envió previamente un telegrama -en el cual pudo haber efectuado alguna aclaración a los fines de facilitar la comunicación- y, frente a la posibilidad de que ello origine la existencia de un diálogo epistolar, podía esperar una respuesta al mismo.

En concordancia, nuestros tribunales han entendido que:

“No es infundado y, por ende, descalificable, el razonamiento sentencial que concluye en que quien debe acarrear con las consecuencias de cualquier imposibilidad de dar con el domicilio (tal como fue denunciado) es el que consigna así su propio domicilio y no quien intenta remitir una comunicación a ese lugar, puesto que -si así fuera- quedaría exclusivamente en manos del destinatario de una pieza postal la posibilidad de recibir las notificaciones que le dirigieran, lo que impediría una adecuada y regular comunicación con su empleador. La carga de brindar precisiones sobre el domicilio que permitan que el mismo sea fácilmente identificado y que responda a un lugar físico donde pueda ser entregada cualquier comunicación postal dirigida a ese lugar no puede hacerse pesar sobre el remitente de una carta documento, si es que éste envía la pieza al domicilio que consta en el legajo laboral del empleado y el consignado en una carta documento remitida por el propio empleado. Por ende, no deviene nulo el pronunciamiento que da relevancia a tal domicilio y hace cargar con las consecuencias de la imprecisión o falta de identificación adecuada a quien lo indicó y no a quien remitió una respuesta postal a ese domicilio; en particular, si es el mismo que fue consignado al interponer la demanda y reconocido como propio por el actor al absolver posiciones. En otras palabras, las comunicaciones postales remitidas por el demandado a su empleado fueron dirigidas al domicilio por él mismo denunciado al enviar, a su turno, otras tantas misivas dirigidas a la empresa, de modo que las dificultades y consecuencias de la “inexistencia de domicilio” consignada por el Correo Argentino no pueden ser soportadas por el remitente, habida cuenta que el envío fue dirigido correctamente al lugar consignado por el actor” (DEL VOTO EN DISIDENCIA DE LA DRA. SBDAR) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo OCHOA ATILIO Y OTRO Vs. ALL MUSIC S.R.L. Y OTROS S/ COBRO DE PESOS Sentencia N° 272 del 27/04/2010

“Es posible sostener que las comunicaciones remitidas por el demandado razonablemente pudieron llegar a la órbita de conocimiento del actor al haber sido enviadas al domicilio que él mismo denuncia como propio (...) Corresponde señalar al respecto que es deber del trabajador obrar de buena fe con motivo del intercambio epistolar efectuado en oportunidad de producirse el distracto (art. 63 LCT), razón por la cual, si al iniciar el intercambio epistolar con el demandado y en la totalidad de las comunicaciones posteriores el trabajador consignó como su propio domicilio el de “San Félix-Dpto. Jiménez”, ante la lógica previsión de que las misivas enviadas por su parte podían ser respondidas a ese mismo domicilio, el trabajador debió extremar los cuidados para recibirlas efectivamente (...)” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 894 de fecha 24/11/2011 en “JUÁREZ ENRIQUE

BELARMINO C/ ORTÍZ MANUEL (H) S/ COBRO DE PESOS.

“Las misivas remitidas por el empleador a la actora de autos, fueron dirigidas al mismo domicilio, que coincide con el denunciado por la actora en su demanda y en los telegramas remitidos por la misma a su empleador. Tiene dicho la doctrina y jurisprudencia al respecto, que el despido una vez notificado a la otra parte produce el efecto de un acto jurídico consumado, por lo que no es admisible su retractación o revocación unilateral. Por ello, cuando se elige el medio clásico de notificación personal, es decir carta documento o telegrama, cabe considerarla cumplida fictamente si fue dirigida al domicilio registrado por el trabajador ante la empresa o, en caso de despido indirecto, cursada a la empresa, aun cuando fracase por circunstancias como "domicilio desconocido", inexistencia de reparto de correspondencia, "domicilio cerrado reiterado", etcétera, ya que es deber legal de las partes mantener actualizados sus domicilios. Además, el deber de obrar de buena fe permite exigir que quien teme que las notificaciones puedan no llegar a su domicilio por razones ajenas a él tome los recaudos necesarios para superar estas circunstancias. (...) La "carga de recepción" implica que el destinatario debe obrar con diligencia y buena fe y facilitar la entrega del mensaje. La recepción de la notificación no queda librada al arbitrio del destinatario, es una carga bilateral ya que pesa sobre ambas partes del contrato y encuentra fundamento jurídico en las normas que regulan la responsabilidad y los deberes de diligencia, información y buena fe (arts. 512, 902, 903, 904, 1198 y conchs., Código Civil; arts. 62, 63, 79, 84, 85 y conchs. LCT)”. CAMARA DEL TRABAJO - CONCEPCION - Sala 2 GIL ROSA ALICIA Vs. ALE JOSE OSCAR S/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Sentencia N° 56 de fecha 09/04/2014

A partir de lo expuesto considero que la carta documento remitida por la demandada el 06/07/11 surtió plenos efectos, ya que existen circunstancias como las mencionadas ut supra que determinan que deba admitirse su validez, en tanto que fue correcto el medio y la forma escogida por la empleadora para contestar a las intimaciones cursadas por el trabajador, por lo que la responsabilidad de su falta de notificación resulta plenamente imputable al trabajador, quien debió arbitrar los medios necesarios a los fines de facilitar la comunicación entre las partes y, por ende, no se configuró el silencio invocado por el actor como causa de su despido indirecto.

En lo referido a la segunda causal de despido invocada por el accionante, esto es, la negativa constante de la patronal registrarlo conforme a su real fecha de ingreso, corresponde su rechazo por cuanto –conforme se resolviera al tratar la primera cuestión- se ha concluido que el trabajador se encontraba bien registrado en cuanto a la fecha en que comenzó la vinculación laboral con la accionada, por no existir prueba alguna que acredite lo contrario.

VI.- Por todo lo expuesto cabe concluir que el despido indirecto en que se colocara el actor resulta injustificado, al no haberse configurado ninguna de las dos causales invocadas en la misiva rupturista (fs.11) impuesta por la accionante el día 19/07/2011. Así lo declaro.

TERCERA CUESTION: plus petición inexcusable.

La accionada, al responder la demanda, planteó plus petición inexcusable al tiempo que efectuaba la impugnación de la planilla de rubros y montos reclamados.

Al respecto, cabe el remitirnos a lo preceptuado por el art. 110 CPCyC, de aplicación supletoria, cuyo 1° párr., prescribe que “la parte que hubiera incurrido en pluspetición inexcusable, será condenada en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia”.

Del análisis del responde, surge que la demandada desde un principio ha negado enfáticamente adeudar al actor las sumas reclamadas en la planilla, por lo tanto, no se encuentra configurado el presupuesto de admisión al que la norma citada le otorga el carácter de requisito sine qua non para la condenación en costas.

En consecuencia, y teniendo presente lo antes expuesto, considero que corresponde rechazar el planteo de pluspetición inexcusable deducido por la accionada, por no darse los presupuestos establecidos en el artículo 110 del CPCyC. Así lo declaro.

CUARTA CUESTION: procedencia o no de los rubros e importes reclamados

I.- El actor pretende el pago de la suma total de \$135.400,39.- o la que surja de las probanzas de autos, con más sus intereses, gastos y costas, en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC proporcional, vacaciones proporcionales, integración mes de despido, diferencias de haberes y multas establecidas en los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323 y art. 132 bis de la LCT.

II.- Base Remuneratoria: Los rubros declarados procedentes deberán ser calculados tomando como base la mejor remuneración devengada por el actor según la categoría laboral reconocida por ambas partes de Vendedor B, su antigüedad y su jornada laboral declaradas al analizar la primera cuestión, conforme CCT 130/75 de aplicación a la actividad.

En relación a la determinación de la remuneración que se tomará como base para el cálculo de las indemnizaciones, deberán adicionarse los rubros no remunerativos previstos en el CCT que rige la actividad, resultando ello procedente en virtud del criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentencia dictada en los autos caratulados “Pérez Aníbal Raúl c/ Disco S.A s/ cobro de pesos”, de fecha 01/09/09 al que adhiero, en cuanto dichos rubros forman parte del salario y deben ser considerados al momento de su determinación. Así lo declaro.

III.- Corresponde aclarar que, el trabajador percibió de parte de la firma demandada la suma de \$2.622,80.- conforme surge de los recibos computarizados de liquidación final, aguinaldo, vacaciones y haberes acompañados por la actora y por la accionada a fs. 02/03 y 59/60, respectivamente, cuya firma fuera expresamente reconocida por el actor en audiencia de reconocimiento glosada a fs. 449. Dicho monto estaba conformado por los siguientes rubros: haberes del mes de junio 2011 \$1.473,30.- ; vacaciones proporcionales año 2011 \$412,50.-; SAC proporcional primer semestre año 2011 \$737.- .

Atento la conformidad tácitamente prestada por el trabajador respecto de la percepción de dichos rubros y montos -ya que no fue cuestionada de modo alguno a lo largo del proceso-, corresponde aclarar que de la planilla a liquidarse deberán ser descontados los mismos y considerados como pago a cuenta en los términos del art. 260 de la LCT. Así lo declaro.

IV.- Conforme lo prescribe el artículo 265 inc. 5 CPCYC supletorio en el fuero, se analizarán por separado cada rubro pretendido.

1.- Indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, SAC s/ preaviso e integración mes de despido: el actor no tiene derecho al cobro de los presentes rubros en virtud de lo considerado en la segunda cuestión respecto de la falta de justificación del despido indirecto decidido unilateralmente por su parte.

2.- Días trabajados julio 2011 (19 días): considerando que el distracto se ha producido el día 19/07/11 (según lo determinado en la primera cuestión) se presume que existen salarios caídos por días trabajados (19 días) por lo que resulta procedente el pago del presente rubro por no encontrarse acreditado su pago con la documentación obrante en la causa. Así lo declaro.

3.- Diferencias por vacaciones proporcionales 2011: de conformidad a lo previsto por el art. 156 de la LCT, a todo trabajador desvinculado le corresponde el pago de las vacaciones proporcionales hasta la fecha del despido. En el caso particular, al encontrarse acreditado el pago de este rubro conforme surge del recibo de liquidación final glosado a fs. 59, el mismo resulta procedente solo por las diferencias que correspondieren atento la jornada de trabajo reconocida a la trabajadora al tratarse la primera cuestión. Así lo declaro

4.- SAC proporcional 2º semestre (igual a SAC s/ días trabajados): el actor tiene derecho a que se le liquide el presente rubro por el hecho de haberse producido el distracto en el mes de julio del año 2011, haberse devengado diariamente el SAC proporcional correspondiente y no existir constancias de su pago, el que deberá ser calculado hasta la fecha del distracto. Así lo declaro.

5.- Diferencias salariales y diferencias SAC 1º semestre año 2011: Respecto a las diferencias salariales reclamadas corresponde que se le liquiden las mismas por los períodos correspondientes a los meses comprendidos entre el mes de mayo del año 2010 y el mes de junio del año 2011, en virtud de lo resuelto respecto a la jornada laboral completa del trabajador y a la fecha de ingreso determinadas al tratarse la primera cuestión. Así lo declaro.

6.- Multa art. 1 de la Ley 25.323: estimo que no resulta procedente esta sanción por no estar acreditadas las situaciones de hecho previstas en la norma legal. En este sentido, la jurisprudencia ha sido concordante al decir que el deficiente registro laboral debe referirse exclusivamente a las situaciones contempladas en los arts. 7, 8, 9 y 10 de la Ley 24.013. En efecto: “La armónica interpretación de los arts. 7, 8, 9 y 10 de la Ley 24.013 y el art. 1 de la Ley 25.323, limita el ámbito de aplicación de este último a los casos explícitamente descriptos en la Ley 24.013, es decir, a) cuando la falta de registro fuera total; b) cuando la falta de registración involucre una posdatación de la fecha de ingreso y c) cuando la falta de registro implique que se hubiera consignado en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador” (CSJT, sentencia N° 472, del

30.06.2010, “Toro José Alejandro vs. Bayton SA y O. s. Cobro de pesos”). Por lo que, no configurándose en el presente litigio ninguno de los supuestos mencionados, el presente rubro no puede prosperar. Así lo declaro.

7.- Multa art. 2 de la Ley 25.323: cabe recordar que dicha norma establece incrementos sobre las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976), por lo que, en virtud de haberse declarado improcedentes dichos rubros, corresponde su rechazo. Así lo declaro.

8.- Multa art. 132 bis de la LCT: cabe decir al respecto que, por imperio del Decreto Reglamentario N° 146/2001, para la procedencia de la sanción prescripta por el art. 132 bis LCT, el trabajador debe intimar al empleador para que cumpla dentro del término de 30 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente, debiendo ingresar en los respectivos organismos recaudadores los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, intimación que en el presente caso no se ha cursado en el plazo establecido.

Del TCL remitido por el actor en fecha 04/07/11, surge que éste intimó al demandado a ingresar los fondos a los organismos de seguridad social. Sin embargo, ese emplazamiento no satisface las exigencias del Art. 1 del Dec. 146/01 porque no contienen la intimación para que el empleador ingrese los importes retenidos y no ingresados en el plazo de treinta días.

Dicha circunstancia, conforme a la doctrina de la CSJT, sentencia N° 411, del 11/05/2009, in re “Fara José Carlos vs. Majasi SRL Ing. Destilería La Trinidad s/Cobro de Pesos”, impide tener por cumplidos los requisitos para la procedencia de la multa pretendida, aún cuando del informe suministrado por AFIP a fs.169/78 surja que se encuentran impagos aportes de la seguridad social y obra social en algunos períodos. Así lo declaro.

CUARTA CUESTION: intereses, honorarios y costas.

INTERESES: Atento a la doctrina fijada por la SCJT, en autos “Olivares, Roberto Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo s. Daños y Perjuicios”, sentencia N° 937/2014, de fecha 23.09.2014, en la que se establece que el procedimiento para el cálculo de los intereses constituye una cuestión propia de la prudente valoración de los jueces, dejando sin efecto el estatus de doctrina legal establecido por el mismo Tribunal en el caso “Galletini Francisco vs. Empresa Gutiérrez SRL s. Indemnizaciones”, sentencia N° 443, del 15.06.2004, estimo pertinente la aplicación al caso de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago.

Ello, por entender que dicha tasa es la que corresponde a las circunstancias socio-económicas actuales, tal como lo han entendido numerosos tribunales en todo el país. Así, por caso, las Cámaras Nacionales del Trabajo, mediante acta N° 2357/2002, del 7 de mayo de 2002, en la que se dispuso su vigencia a partir del 6 de enero de 2002, y el plenario “Samudio de Martínez c/ Transportes 260 SA s/ daños y perjuicios”, del 20.04.2009, de las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil, de fecha 20.04.2009.

En efecto, y tal como lo expresó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza: “Una tasa -como la pasiva-, que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios, no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda. Es por ello, que la tasa de interés debe cumplir, además, una función moralizadora evitando que el deudor se vea premiado o compensado con una tasa mínima, porque implica un premio indebido a una conducta socialmente reprochable. Al tratarse de deudas reclamadas judicialmente debe existir un plus por mínimo que sea que desaliente el aumento de la litigiosidad (“Amaya, Osvaldo D. c/ Boglioli, Mario” del 12/9/05; LL Gran Cuyo, 2005 –octubre-, 911-TySS2005, 747-IMP2005-B, 2809)”.

La tasa pasiva del BCRA no cumple con los fines y propósitos resarcitorios de los intereses ya que no representa fielmente el incremento de las remuneraciones, determinando, como consecuencia, que el acreedor laboral (que es un sujeto de preferente tutela constitucional -art. 14 bis CN- y en los tratados sobre derechos humanos –art. 75.22 CN-) vea menguado su crédito, con claro conculcamiento de las garantías de igualdad ante la ley (art. 16 CN); de propiedad (art. 17 CN) y de indemnidad (art. 19). Por otra parte, el “quantum” de la tasa pasiva, que se venía aplicando hasta ahora en los tribunales locales, no sólo no logra realizar la justicia del caso sino que, como resultado, premia el incumplimiento como conducta social (Drucaroff Aguiar, Alejandro, “La modificación del plenario Uzal. Una cuestión esencial no resuelta”, La Ley, 4/9/03).

Por lo demás, la aplicación de la tasa activa no es incompatible con la prohibición de indexar establecida por las leyes 23.928 y 25.561, ya que no debe interpretarse que la tasa de interés deba

divorciarse de la realidad, ni de los principios constitucionales de justicia, equidad, protección al trabajo y propiedad, a los que debe subordinarse, puesto que una ley jamás puede prevalecer sobre la Carta Magna.

Por ello, se dispone aplicar al caso la tasa de interés precedentemente referenciada. Así lo declaro.

COSTAS: Atento al progreso parcial de la demanda y naturaleza de las costas, estimo de justicia imponerlas en las siguientes proporciones: el demandado deberá soportar sus propias costas más el 50% de las costas generadas por la parte actora, debiendo esta última cargar con el 50% restante de sus propias costas (conf. art. 108 CPCyC, supletorio). Así lo declaro.

Conforme lo meritado con anterioridad, se practica la siguiente

PLANILLA DE CAPITAL E INTERESES

Heredia	Jonatan	Armando	-	Cahuana	Mariela
Myriam	Ingreso03/05/2010	Egreso19/07/2011	Antigüedad1 año, 2 meses y 16 días	CategoríaVendedor	B (CCT 130/75)
Mejor remuneración mensual normal y habitual devengada -jun11 \$ 3.804,62 1). Días trabajados jul-11 \$ 2.331,87 \$ 3.804,62x 19 / 312). 2° SAC proporcional 2011 \$ 179,66 \$ 3.804,62/ 2 Proporción 9,44%3). Dif. vacaciones proporcionales 2011 \$ 743,27 Debió percibir \$ 1.155,77 \$ 3.804,62 x 7,59 / 25 Días de vacaciones 7,59 Percibió \$ 412,50 Diferencia \$ 743,27 Total \$ al 19/07/2011 \$ 3.254,80 Interés tasa activa Banco Nación desde 24/07/11 al 31/08/2018171,49% \$ 5.581,66 Total \$ al 31/08/2018 \$ 8.836,46					

Remuneración devengada	may-10	jun-10	jul-10	ago-10	sep-10	Basico	\$ 1.380,01	\$ 1.380,01	\$ 1.455,92
							\$ 1.531,84	\$ 1.607,75	Antigüedad \$ - \$ - \$ - \$ - NR \$ 776,00 \$ 1.185,65 \$ 1.120,99 \$ 1.056,32 \$ 1.171,25
Presentismo	\$ 179,67	\$ 213,81	\$ 214,74	\$ 215,68	\$ 231,58	Total	\$ 2.335,68	\$ 2.779,47	\$ 2.791,65
	\$ 2.803,84	\$ 3.010,58	oct-10	nov-10	dic-10	ene-11	feb-11	Basico	\$ 1.683,66 \$ 1.759,58 \$ 1.835,49 \$ 1.911,40 \$ 1.987,32
Antigüedad	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - NR	\$ 1.106,58	\$ 1.041,92	\$ 1.114,51	\$ 1.049,84	\$ 985,18	Presentismo	\$ 232,52 \$ 233,46 \$ 245,83 \$ 246,77 \$ 247,71	
Total	\$ 3.022,76	\$ 3.034,96	\$ 3.195,83	\$ 3.208,01	\$ 3.220,21	mar-11	abr-11	may-11	jun-11
Basico	\$ 2.063,23	\$ 2.139,14	\$ 2.215,06	\$ 2.290,97	Antigüedad	\$ - \$ - \$ 22,15 \$ 22,91 NR \$ 920,51 \$ 855,84 \$ 791,18 \$ 1.198,08			
Presentismo	\$ 248,65	\$ 249,58	\$ 252,37	\$ 292,66	Total	\$ 3.232,39	\$ 3.244,56	\$ 3.280,76	\$ 3.804,62

4). Diferencias salariales	Mes	Debió percibir	Percibió	Diferencia	%	Tasa activa al 31/08/2018
Intereses	Total	\$ al 31/08/2018	may-10	\$ 2.335,68	\$ 1.228,20	\$ 1.107,48193,14%
	\$ 2.138,98	\$ 3.246,46	jun-10	\$ 2.779,47	\$ 1.228,20	\$ 1.551,27191,59%
	\$ 2.972,07	\$ 4.523,33	jul-10	\$ 2.791,65	\$ 1.250,90	\$ 1.540,75189,98%
	\$ 2.927,12	\$ 4.467,87	ago-10	\$ 2.803,84	\$ 1.250,90	\$ 1.552,94188,38%
	\$ 2.925,43	\$ 4.478,37	sep-10	\$ 3.010,58	\$ 1.252,80	\$ 1.757,78186,83%
	\$ 3.284,07	\$ 5.041,85	oct-10	\$ 3.022,76	\$ 1.277,60	\$ 1.745,16185,23%
	\$ 3.232,56	\$ 4.977,72	nov-10	\$ 3.034,96	\$ 1.303,20	\$ 1.731,76183,68%
	\$ 3.180,89	\$ 4.912,65	dic-10	\$ 3.195,83	\$ 1.329,30	\$ 1.866,53182,08%
	\$ 3.398,58	\$ 5.265,122°	SAC 2010	\$ 1.597,92	\$ 664,70	\$ 933,22182,08%
	\$ 1.699,20	\$ 2.632,42	ene-11	\$ 3.208,01	\$ 1.329,30	\$ 1.878,71180,48%
	\$ 3.390,70	\$ 5.269,41	feb-11	\$ 3.220,21	\$ 1.329,30	\$ 1.890,91179,03%
	\$ 3.385,29	\$ 5.276,20	mar-11	\$ 3.232,39	\$ 1.417,60	\$ 1.814,79177,43%
	\$ 3.219,97	\$ 5.034,76	abr-11	\$ 3.244,56	\$ 1.329,30	\$ 1.915,26175,88%
	\$ 3.368,56	\$ 5.283,82	may-11	\$ 3.280,76	\$ 1.329,30	\$ 1.951,46174,28%
	\$ 3.401,00	\$ 5.352,45	jun-11	\$ 3.804,62	\$ 1.423,30	\$ 2.381,32172,73%
	\$ 4.113,26	\$ 6.494,581°	SAC 2011	\$ 1.902,31	\$ 737,00	\$ 1.165,31172,73%
	\$ 2.012,84	\$ 3.178,15	Total	diferencias	\$ 75.435,17	

Rubros 1) al 3) \$ 8.836,46 Rubro 4) Diferencias salariales \$ 75.435,17 Total condena al 31/08/2018 \$ 84.271,63

HONORARIOS: Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc. B del CPL. A tales efectos se tomará como base regulatoria el monto de demanda actualizado en un 30% de conformidad con lo preceptuado por el art. 50 - inc. b - de la Ley 6.204 (t.o.).

A fin de contar con una base cierta se procederá a calcular los intereses haciendo aplicación de la tasa activa, cuyo procedimiento es el siguiente: monto demandado: \$135.400,39.-. Período: 06/03/2012 (fecha de interposición de la demanda) al 31/08/18 = 159,81%, lo que nos da la suma de \$216.383,36.- logrando un total de \$351.783,75.- tomado al 30%, el resultado es de \$105.535,13.- monto este último que se tendrá en cuenta a los fines ya señalados.

Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por el único profesional interviniente, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito, lo dispuesto por los art. 12, 15, 38, 42 y concordantes de la ley 5480, art. 51 del CPL, art. 1 de la ley

24432 ratificada por ley provincial nº 6715, se regulan honorarios de la siguiente manera:

Honorarios por el proceso de conocimiento

1) A la letrada María Belén Ramayo Hernández, por sus actuaciones profesionales en el carácter de apoderada de la parte actora, en las tres etapas del proceso de conocimiento, la suma de \$19.629,53.- (12% más el 55% por el doble carácter)

2) Al letrado Sebastián Rodríguez Rueda por sus actuaciones en el carácter de apoderado de la parte demandada en las tres etapas del proceso de conocimiento, la suma de \$16.357,94.- (10% más el 55%, por el doble carácter).

3) Al Perito Contador CPN Juan Francisco Núñez, al no haber realizado el trabajo pericial encomendado no se le regularán honorarios en virtud de lo normado por el art. 51 último párrafo del CPL.

Honorarios por la reserva de fs. 104/05 (imposición de costas por el orden causado).

1) A la letrada María Belén Ramayo Hernández, por su actuación como apoderada de la parte actora, de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la ley 5480, la suma de \$2.944,43.- (base \$19.639,53.- x 15%).

2) Al letrado Sebastián Rodríguez Rueda, por su actuación como apoderado de la parte demandada, de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la ley 5480, la suma de \$2.453,69.- (base \$16.357,94.- x 15%).

Honorarios por la reserva de fs. 183 (imposición de costas a la demandada vencida).

1) A la letrada María Belén Ramayo Hernández, por su actuación como apoderada de la parte actora, de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la ley 5480, la suma de \$3.925,91.- (base \$19.639,53.- x 20%).

2) Al letrado Sebastián Rodríguez Rueda, por su actuación como apoderado de la parte demandada, de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la ley 5480, la suma de \$1.635,79.- (base \$16.357,94.- x 10%).

Honorarios por la reserva de fs. 354/55 (imposición de costas a la actora vencida).

1) A la letrada María Belén Ramayo Hernández, por su actuación como apoderada de la parte actora, de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la ley 5480, la suma de \$1.962,95.- (base \$19.639,53.- x 10%).

2) Al letrado Sebastián Rodríguez Rueda, por su actuación como apoderado de la parte demandada, de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la ley 5480, la suma de \$3.271,59.- (base \$16.357,94.- x 20%).

Por ello,

RESUELVO:

I) ADMITIR PARCIALMENTE a la demanda promovida por el Sr. Jonatán Armando Heredia, argentino, mayor de edad, DNI Nº 42.445.432, domiciliado en Barrio La Estación, calle s/ nombre y s/ número, de la localidad de San Andrés, Provincia de Tucumán, en contra de la Sra. Mariana Myriam Cahuana, DNI Nº 25.255.221, con domicilio real en calle 24 de Septiembre Nº 233 de esta ciudad. En consecuencia, se condena a esta última al pago de la suma total de \$84.271,63.- en concepto de días trabajados del mes de julio de 2011, diferencias de vacaciones proporcionales año 2011, diferencias de SAC 1º semestre año 2011, SAC proporcional 2º semestre año 2011 (SAC s/ días trabajados) y diferencias salariales correspondientes al período comprendido entre el mes de mayo de 2010 y el mes de junio de 2011, la que deberá hacerse efectiva dentro de los diez días de ejecutoriada la presente.

II) Absolver a la accionada de los rubros reclamados por los conceptos de indemnización por antigüedad, indemnización por preaviso, integración mes de despido, SAC sobre preaviso, diferencias salariales correspondientes al período comprendido entre el mes de mayo de 2009 y el mes de abril de 2010, multa del art. 1 de la ley 25.323, multa del art. 2 de la ley 25.323 y multa del art. 132 bis de la LCT, conforme a lo considerado.

III) Costas: en la proporción establecida, de acuerdo a lo considerado.

IV) HONORARIOS 1) A la letrada María Belén Ramayo Hernández, por sus actuaciones profesionales en el carácter de apoderada de la parte actora, en las tres etapas del proceso de conocimiento, la suma de \$19.629,53.-; por la incidencia de fs.104/05, la suma de \$2.944,43.-; por la incidencia de fs.183 la suma de \$3.925,91.- y por la incidencia de fs. 354/55 la suma de \$1.962,95.-

V) HONORARIOS: Al letrado Sebastián Rodríguez Rueda por sus actuaciones en el carácter de apoderado de la parte demandada en las tres etapas del proceso de conocimiento, la suma de \$16.357,94.- por la incidencia de fs.104/05, la suma de \$2.453,69.-; por la incidencia de fs.183 la suma de \$1.635,79.- y por la incidencia de fs. 354/55 la suma de \$3.271,59.-

VI) HONORARIOS: al perito contador CPN Juan Francisco Núñez, al no haber realizado el trabajo pericial encomendado no se le regularán honorarios en virtud de lo normado por el art. 51 último párrafo del CPL.

VII) PLANILLA FISCAL: Oportunamente practíquese y repóngase (art. 13 ley 6204).

VIII) COMUNIQUESE a la Caja de Previsión y seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.

IX) COMUNICAR a AFIP–DGI en la etapa de cumplimiento de sentencia de conformidad a lo prescripto por el art. 17 de la ley N° 24.013

REGISTRESE, ARCHIVESE Y HAGASE SABER.- LM 222/12



**Colegio de Abogados
de Tucumán**

F.AI.01

**Actualización de
Importes**

San Miguel de Tucumán, 05 de Mayo de 2022

FECHAS

Fecha Inicial:

05 de Mayo de 2018

Fecha Final:

30 de Abril de 2022

FORMULA

05/05/18 - 31/05/18 =>	2.5550 x 0,87	2,23%
01/06/18 - 30/06/18 =>	2.7420 x 1	2,74%
01/07/18 - 31/07/18 =>	2.9790 x 1	2,98%
01/08/18 - 31/08/18 =>	3.3080 x 1	3,31%
01/09/18 - 30/09/18 =>	3.8032 x 1	3,80%
01/10/18 - 31/10/18 =>	4.6285 x 1	4,63%
01/11/18 - 30/11/18 =>	6.2646 x 1	6,26%
01/12/18 - 31/12/18 =>	5.0471 x 1	5,05%
01/01/19 - 31/01/19 =>	4.6046 x 1	4,60%
01/02/19 - 28/02/19 =>	3.9149 x 1	3,91%
01/03/19 - 31/03/19 =>	3.8943 x 1	3,89%
01/04/19 - 30/04/19 =>	4.6488 x 1	4,65%
01/05/19 - 31/05/19 =>	5.1020 x 1	5,10%
01/06/19 - 30/06/19 =>	5.1421 x 1	5,14%
01/07/19 - 31/07/19 =>	4.7540 x 1	4,75%
01/08/19 - 31/08/19 =>	5.2419 x 1	5,24%
01/09/19 - 30/09/19 =>	5.8858 x 1	5,89%
01/10/19 - 31/10/19 =>	5.6431 x 1	5,64%
01/11/19 - 30/11/19 =>	4.7082 x 1	4,71%
01/12/19 - 31/12/19 =>	4.2272 x 1	4,23%
01/01/20 - 31/01/20 =>	3.7247 x 1	3,72%
01/02/20 - 29/02/20 =>	3.3758 x 1	3,38%
01/03/20 - 31/03/20 =>	2.9899 x 1	2,99%
01/04/20 - 30/04/20 =>	2.2855 x 1	2,29%
01/05/20 - 31/05/20 =>	2.0752 x 1	2,08%
01/06/20 - 30/06/20 =>	2.8417 x 1	2,84%
01/07/20 - 31/07/20 =>	2.9179 x 1	2,92%
01/08/20 - 31/08/20 =>	2.9140 x 1	2,91%
01/09/20 - 30/09/20 =>	2.9323 x 1	2,93%
01/10/20 - 31/10/20 =>	2.9814 x 1	2,98%
01/11/20 - 30/11/20 =>	3.2013 x 1	3,20%
01/12/20 - 31/12/20 =>	3.3809 x 1	3,38%
01/01/21 - 31/01/21 =>	3.3706 x 1	3,37%
01/02/21 - 28/02/21 =>	3.3604 x 1	3,36%
01/03/21 - 31/03/21 =>	3.3565 x 1	3,36%
01/04/21 - 30/04/21 =>	3.3623 x 1	3,36%
01/05/21 - 31/05/21 =>	3.3630 x 1	3,36%
01/06/21 - 30/06/21 =>	3.3620 x 1	3,36%
01/07/21 - 31/07/21 =>	3.3644 x 1	3,36%

01/07/21 - 31/07/21 => 3.3644 x 1	3,36%
01/08/21 - 31/08/21 => 3.3682 x 1	3,37%
01/09/21 - 30/09/21 => 3.3672 x 1	3,37%
01/10/21 - 31/10/21 => 3.3684 x 1	3,37%
01/11/21 - 30/11/21 => 3.3694 x 1	3,37%
01/12/21 - 31/12/21 => 3.3698 x 1	3,37%
01/01/22 - 31/01/22 => 3.5628 x 1	3,56%
01/02/22 - 28/02/22 => 3.7394 x 1	3,74%
01/03/22 - 31/03/22 => 3.9472 x 1	3,95%
01/04/22 - 30/04/22 => 4.1873 x 1	4,19%
TOTAL	180,20%

RESULTADOS

Importe original:	\$ 13.740,63
Porcentaje de actualización:	180,20 %
Intereses acumulados:	\$ 24.761,18
Importe actualizado:	\$ 38.501,81

Aclaración: La presente actualización está sujeta a revisión y contralor por parte del peticionante, de modo que no es apta para ser presentada administrativa o judicialmente.

Expediente: **222/12**
Carátula: **HEREDIA JONATAN ARMANDO C/ CAHUANA MARIELA MYRIAM S/COBRO DE PESOS S/**
Descripción: **CEDULA CASILLERO DIGITAL**
Unidad Judicial: **JUZGADO DEL TRABAJO V**
Depositado en casillero virtual el: **03/05/2021**

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

JUZGADO DEL TRABAJO V

ACTUACIONES N°: 222/12



H103052788266

Cédula n° **2919**

CEDULA DE NOTIFICACION

San Miguel de Tucumán, 29 de abril de 2021.-

AUTOS: HEREDIA JONATAN ARMANDO c/ CAHUANA MARIELA MYRIAM S/COBRO DE PESOS s/ X- APELACION ACTUACION MERO TRAMITE-EXpte N°222/12

Se notifica al Dr.: **RODRIGUEZ RUEDA,SEBASTIAN APODERADO -**

Domicilio Digital Constituido: **900000000000** ESTRADO JUDICIAL DIGITAL

PROVEIDO

"San Miguel de Tucumán, 27 de abril de 2021.- De la planilla de intereses presentada por la parte actora por actualización de capital: **córrase traslado a la parte demandada por el término de cinco días.** PERSONAL.- JRP 222/12 " FDO: DR. EZIO ENRIQUE JOGNA PRAT, JUEZ SUBROGANTE. **QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.** Se adjunta archivo pdf en 05 páginas.- 222/12-ACB

Firmado digitalmente por:
CN=NOGUERA Federico
C=AR
SERIALNUMBER=CUIL 20355176321
FECHA FIRMA=30/04/2021

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.